



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

Bolivia	2
Colombia	3
España	4
México	6
Perú.....	7



ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

BOLIVIA

Sentencia constitucional 1426/2005-R de 2005 del Tribunal Constitucional: Recurso de amparo para la protección del derecho al trabajo y a la propiedad. 8 de noviembre de 2005.

Presentación:

Esta decisión, originada en un amparo presentado por una persona jurídica en contra de una decisión judicial, resulta interesante pues el Tribunal Constitucional establece una nueva línea jurisprudencial, al establecer que los únicos límites a la aplicación de la jurisprudencia constitucional en el tiempo lo constituyen la cosa juzgada formal y material y en derecho penal cuando el entendimiento jurisprudencial es perjudicial al imputado.

El Tribunal Constitucional establece que el principio de irretroactividad no es aplicable al ámbito de la jurisprudencia, debido a que ésta sólo precisa el sentido y alcances de la norma, sin modificar o crear un nuevo texto legal y que la única excepción a la regla antes aludida están constituidas por:

1. La cosa juzgada, en la medida en que los nuevos entendimientos jurisprudenciales no pueden afectar los asuntos ya resueltos y que se encuentran firmes e inimpugnables, esto es, que tenga la calidad de cosa juzgada formal y material; y
2. La jurisprudencia que perjudica al imputado en materia de derecho penal sustantivo; lo que implica que, en este último caso, no se pueden aplicar en forma retroactiva los entendimientos jurisprudenciales que afecten o desmejoren las esferas de libertad del imputado o condenado.



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

COLOMBIA

Sentencia de la Corte Constitucional C-059/2005 . Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 599 de 2000, que otorga competencia a los jueces de paz y a los conciliadores en equidad para tomar medidas en casos de violencia doméstica. 1 de febrero de 2005

Presentación, por Beatriz Eugenia Sánchez:

En este fallo la Corte Constitucional declara ajustada a la Constitución la Ley 575 de 2000, al sostener que el Estado no está obligado únicamente a tomar medidas represivas frente a la violencia intrafamiliar, sino que debe además desarrollar mecanismos de prevención, mediación y conciliación. Estos deben estar a disposición de las víctimas, sin que ello implique una renuncia a la vía penal.

Las personas afectas por este tipo de violencia cuentan con treinta días - término previsto en la ley - para solicitar una medida protectora. La Corte considera razonable este plazo, mas precisa que en situaciones de intimidación, que impidan solicitar protección dentro de ese plazo, la autoridad puede ampliarlo tras haber escuchado a la persona afectada. Ver la sentencia .

Sentencia de la Corte Constitucional T-826/2005. Acción de tutela por vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación. 10 de agosto de 2005

Presentación por Beatriz Eugenia Sánchez:

En Colombia las viviendas se encuentran clasificadas en estratos o zonas sociales, lo que determina el costo de los servicios públicos. Actualmente existen siete estratos, siendo el primero en el que los servicios resultan más baratos - ya que se encuentran subsidiados- y el séptimo aquél en el que resultan más caros, al estar sujetos a cargas adicionales en desarrollo del principio de solidaridad. En esta decisión la Corte se pronuncia sobre la discriminación que supone el que una vivienda sea ubicada en la tercera zona social, cuando sus vecinos han sido clasificados en la segunda. Así mismo, la decisión señala que no puede la autoridad pública remediar el trato discriminatorio en el que ha incurrido, recalificando la zona e imponiendo a todos los habitantes de esta la carga de pertenecer al estrato 3. Ver la sentencia .

Sentencia de la Corte Constitucional T-855/2005. Acción de tutela por vulneración de los derechos a la salud y a la personalidad jurídica de los niños 25 de agosto de 2005

Presentación por Beatriz Eugenia Sánchez:

Esta sentencia reafirma la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de los derechos de los niños y la prioridad que debe darse a su atención. En esta ocasión la argumentación gira en torno al derecho de un menor, con graves problemas de salud, a acceder al sistema de sanidad pública, y a la obligación de las autoridades de reconocer su personalidad jurídica. Ver la sentencia .



ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

ESPAÑA

Sentencia 237/2005 del Tribunal Constitucional

. Recurso de amparo. Vulneración del Derecho a la tutela judicial efectiva de un grupo de recurrentes guatemaltecos (encabezados por Rigoberta Menchú) por la denegación de acceso a la jurisdicción española, en su deseo de proceder ante la misma por diversos crímenes contra la humanidad acontecidos en Guatemala. 26 de septiembre de 2005.

Recurso de Amparo núms. 1744-2003, 1755-2003 y 1773-2003

Presentación por Itziar Gómez Fernández:

El interés de esta sentencia de amparo tiene que ver, esencialmente, con la trascendencia que la solución adoptada pueda tener en relación con la competencia de los Tribunales Españoles para conocer de delitos de genocidio acontecidos fuera del territorio nacional y en relación con víctimas de nacionalidad no española.

Los recursos de amparo a que este pronunciamiento da respuesta fueron interpuestos por varios ciudadanos guatemaltecos, encabezados por Dña. Rigoberta Menchú y por diversas asociaciones españolas en defensa de los Derechos Humanos. Los actos recurridos son la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003 que estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto contra el Auto del Pleno de la Sala de lo Penal la Audiencia Nacional de 13 de diciembre de 2000, así como contra esta última resolución y el núcleo de la controversia se centra en la afirmación, hecha por los recurrentes, de que la interpretación que tales pronunciamientos de la jurisdicción ordinaria hacen del art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y del principio de jurisdicción penal universal allí contenido es excesivamente restrictivo, tanto que choca con el derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de acceso a la jurisdicción.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia, reconoce efectivamente el rigorismo que los jueces ordinarios han empleado en la interpretación del art. 23.4 LOPJ, lo cual les hace incompatibles con el derecho de acceso a la jurisdicción. De los argumentos utilizados que el Alto Tribunal puede deducirse que la conexión con intereses nacionales que debe exigirse en un proceso para que de él conozcan los jueces y tribunales españoles no ha de entenderse en sentido estricto, sino en sentido amplio, de acuerdo con el principio pro actione, y que tal conexión concurrirá cuando pueda apreciarse en relación directa con "el delito que se toma como base para afirmar la atribución de jurisdicción", o cuando existan intereses "nacionales con otros delitos conectados con aquél", o cuando existan intereses con el contexto que rodea tales delitos. Ver la sentencia .

Sentencia 273/2005 del Tribunal Constitucional

. Cuestión de inconstitucionalidad núm 1678/1998 en relación con el párrafo primero del artículo 133 del Código Civil (filiación extramatrimonial). Primera sentencia del TC en que se cita la Constitución Europea (Carta de Derechos) como parámetro interpretativo. 27 de octubre de 2005.

Presentación por Itziar Gómez Fernández:

Este pronunciamiento resuelve el ajuste constitucional del párrafo primero del art. 133 del Código Civil que reconoce la legitimación de los hijos para reclamar la filiación no matrimonial en caso de inexistencia de posesión de estado y , a sensu contrario, impide al progenitor no matrimonial la reclamación de la filiación en los mismos supuestos.

La relevancia de esta sentencia no se encuentra tanto en el contenido material de la misma sino en los efectos del pronunciamiento y en la alusión realizada por el Tribunal a al texto del Convenio por el que se establece una Constitución para Europa.

En relación con la primera cuestión el Tribunal Constitucional, en el FJ 9º de la Sentencia, tras haber razonado en los fundamentos anteriores la inconstitucionalidad del precepto en cuestión, desvincula esa declaración de inconstitucionalidad de la proclamación de la nulidad del mismo, porque la razón de la inconstitucionalidad del precepto no radica en la dicción literal o textual del mismo, sino en las omisiones que en él se hayan presentes. Es decir, el Tribunal viene a proclamar una inconstitucionalidad por omisión del legislador, frente a la cual no cabe declarar la nulidad del artículo impugnado, porque esto no sólo no repararía la inconstitucionalidad apreciada sino que incrementaría los efectos dañinos para los derechos de los particulares. El Tribunal no expresa literalmente de este modo:

" En el presente caso es evidente que no procede declarar la nulidad de la regla legal que, en ausencia de posesión de estado, otorga al hijo la legitimación para reclamar la filiación no matrimonial durante toda su vida, pues tal pronunciamiento, además de no reparar la inconstitucionalidad apreciada, dañaría, sin razón alguna, a quienes ostentan, en virtud del art. 133 CC, y en forma plenamente conforme con los mandatos del art. 39 CE, una acción que no merece tacha alguna de inconstitucionalidad. Así pues, la declaración de nulidad de este precepto, consecuente a la declaración de inconstitucionalidad, generaría un vacío normativo, sin duda no deseable".

Así pues el Tribunal afirma que es el legislador, dentro de su libertad para desarrollar su labor legislativa, quien debe elaborar las normas necesarias para corregir la situación inconstitucional detectada por el Tribunal. En relación con la referencia al Tratado Constitucional Europeo el Tribunal el tribunal alude al mismo en un obiter dictum, al referirse al contenido del apartado 4 del artículo 39 de la Constitución que establece que «[l]os niños gozarán de la protección

prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos». Para dotar de contenido, pues, al derecho a la protección de la infancia, el Tribunal asegura que es preciso referirse a fuentes externas, entre las cuales cita la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989 (ratificada por España el 30 de noviembre de 1990), la Carta europea de los derechos del niño, proclamada por Resolución del Parlamento Europeo de 18 de julio de 1992, y el art. 23 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, aprobada en Niza el 7 de diciembre de 2001. En relación con este último texto, del cual afirma su ausencia de fuerza vinculante, establece que el mismo se ha incorporado al título II del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Esta referencia es realmente confusa porque el Tribunal no dice, aunque de todos es sabido, que el Tratado no ha entrado en vigor en el orden comunitario, y es posible que no llegue a hacerlo en el corto plazo, con lo cual está aludiendo a una norma que no ha sido aún incorporada al ordenamiento interno, aunque España si haya finalizado el proceso de ratificación con respecto a la misma. A este detalle, sin duda inadecuado, se uniría el hecho de que la Carta de Niza perdería, de entrar en vigor la Constitución Europea, su carácter de norma no vinculante, con lo cual cuando se cita la Carta como parte integrante del Tratado y a su vez se alude a su falta de vinculatoriedad se introduce un elemento de confusión notable y, sobre todo, innecesario. [Ver la sentencia](#) .

Sentencia 292/2005 del Tribunal Constitucional . Recurso de Amparo conocido por el Pleno. Extradición con Francia y aplicación de la Euroorden. 10 de noviembre de 2005

Presentación por Itziar Gómez Fernández:

En esta sentencia de amparo, cuyo conocimiento avocó para sí el Pleno del Tribunal Constitucional, se resuelve un problema de extradición de un ciudadano español a Francia, concluyéndose la inconstitucionalidad de la extradición por vulneración de los derechos del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). El interés de este pronunciamiento radica en que hace referencia, aunque de modo tangencial, a una de las bases del tercer pilar comunitario, la Euroorden, que vendría a sustituir al modelo clásico de extradición entre los países firmantes del Tratado de la Unión Europea, desplazando así la aplicación del Convenio europeo de extradición del Consejo de Europa de 1957.

El problema que trata de resolverse es si el procedimiento de extradición del nacional español que recurre en amparo se ajusta o no a los cánones legalmente establecidos que garantizarían su ajuste al art. 24 CE. Entre esos cánones está la exigencia de que exista una base legal para la extradición, base legal, por supuesto, que respete, entre otros, el principio de publicidad de las normas, lo cual significa que su publicación ha de ser válida en España.

Todo el razonamiento del Tribunal Constitucional se basa en el análisis de este extremo, es decir, en la reflexión acerca de la existencia de base legal respetuosa del principio de publicidad, y ello siguiendo lo establecido en el precedente fijado por la STC 141/1998. Con arreglo a dicho precedente se estima que no existe base legal para la extradición en la medida en que el Gobierno Francés introdujo en su día una reserva a la aplicación del Convenio Europeo de Extradición que impedía la extradición de los ciudadanos franceses - con lo cual no se respetaba la cláusula de reciprocidad exigida para poder extraditar a Francia nacionales españoles-, reserva levantada y cuyo levantamiento no habría sido válidamente publicado en España, con lo cual no podría ser considerado por los jueces y tribunales nacionales para conceder una extradición. Es decir, todo el razonamiento del Tribunal Constitucional se basa en la consideración de que la eficacia de un texto convencional internacional pasa por su válida publicación en el orden interno, de modo tal que, si no media tal publicación, la disposición no deviene aplicable en España y por tanto no es base jurídica adecuada para conceder, por ejemplo, una extradición.

En los votos particulares, no obstante, se observa el problema desde otra perspectiva, considerando que, en realidad la Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre Euroorden, vendría a ser el derecho aplicable al caso, porque estaría sucediendo, para un ámbito de aplicación coincidente, al Convenio Europeo de Extradición. En ese caso no sería necesario hablar de un problema de publicación de las normas, porque dicha disposición fue publicada en el Boletín Oficial de la UE, con plenos efectos para el ordenamiento español. El problema, según los firmantes del voto particular, es que la Audiencia Nacional, en su decisión de extradición, no hizo referencia a esta Decisión Marco, sino al Convenio Europeo, errando en la legislación aplicable, cuestión que, en cualquier caso, no es competencia del Tribunal Constitucional corregir al tratarse de un problema de legalidad ordinaria. [Ver la sentencia](#) .



ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

MÉXICO

Tesis aislada de jurisprudencia CXXXV/2005. Separación de poderes

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES.

Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESCRITO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)", siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado —y entre ellos, el juzgador constitucional— deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso —o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo—, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias.

Amparo en revisión 1629/2004. Inmobiliaria Dos Carlos, S.A. de C.V. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Tesis aislada de jurisprudencia CXXXVI/2005. Equidad en la tributación

EQUIDAD TRIBUTARIA. ÁMBITO ESPECÍFICO DE SU APLICACIÓN.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad, y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico, sin establecer casos de excepción en su aplicación. Así, se ha señalado que el artículo 31, fracción IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo, debiendo apreciarse que la garantía de equidad no tiene menor o mayor valor que la de igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales, en tanto que la primera es una manifestación concreta de esta última. En este contexto, debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garantía de equidad tributaria, precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen. En tal sentido, la Suprema Corte ha precisado progresivamente su alcance y ha señalado que la referida garantía, a través de un texto formal y materialmente legislativo, resulta aplicable al establecimiento de las contribuciones, de las exenciones previstas con motivo de éstas, así como de las obligaciones materialmente recaudatorias vinculadas a la potestad tributaria. De manera que cuando las disposiciones analizadas no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad tributaria —es decir, cuando se trata de disposiciones legales que no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias, así como en los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Ejecutivo— los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto más amplio que corresponde a la garantía de igualdad.

Amparo en revisión 1629/2004. Inmobiliaria Dos Carlos, S.A. de C.V. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Tesis aportadas por Luisa Conesa



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 11- AJ Peru

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

PERÚ

Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) - Exp. N.º 019-2005 -PI/TC – Demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley N.º 28568, que modifica el artículo 47 del Código Penal equiparando el arresto domiciliario con la prisión efectiva. 23 de julio de 2005.

Presentación por Samuel Abad Yupanqui:

Se trata de un proceso de inconstitucionalidad resuelto en tiempo record, pues la demanda se presentó el 8 de julio del 2005 y la sentencia se dictó el 23 del mismo mes, es decir, todo el proceso sólo duró quince días. Esta situación se explica por el contexto en que se dictó la ley cuestionada y los alcances de la misma. La referida ley equiparó el arresto domiciliario con la prisión efectiva y al amparo de la misma dos personas vinculadas a la red de corrupción liderada por Fujimori - Montesinos solicitaron y obtuvieron su libertad pues sumaron los días que estuvieron con arresto domiciliario. Ante la reacción de la opinión pública, los congresistas que aprobaron la ley adujeron no haberse percatado de sus efectos en la lucha contra la corrupción y la derogaron. Pero no sólo eso sino que además presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El TC en una importante decisión declaró fundada la demanda y se pronunció sobre los efectos de la norma pese a que la misma se encontraba derogada. Ver la sentencia.

Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. . N.º 5396-2005-PA/TC – San Martín, caso Max Henry Ramírez García. 6 de septiembre de 2005.

Presentación por Samuel Abad Yupanqui:

Se ha discutido intensamente si las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral pueden ser revisadas. Se ha dicho que ello afectaría las elecciones del 2006. A nuestro juicio, la controversia se ha sobredimensionado; es más el tema no es reciente. En efecto, el Código Procesal Constitucional (CPC), publicado en mayo del 2004 y vigente desde el 1 de diciembre último, introdujo una disposición que permite acudir al proceso de amparo, en forma excepcional, cuando una resolución del JNE viola en forma manifiesta el debido proceso (o “tutela procesal efectiva”). El amparo jamás revisa la materia electoral, sólo evalúa si el JNE respetó o no el debido proceso. Si no lo hizo anula su resolución y dispone que dicte otra garantizando dicho derecho.

Suele alegarse que el artículo 142 de la Constitución dispone que “no son revisables en sede judicial las resoluciones del JNE en materia electoral”. Tal disposición no puede ser interpretada en base a un criterio literal que consolide poderes absolutos sin control constitucional. Las normas no se interpretan en forma aislada –principio de unidad de la Constitución–, hay que efectuar una interpretación que armonice lo dispuesto por el artículo 142 y el debido proceso que es esencial en una democracia y debe ser respetado por todos, incluso, por el JNE.

Así lo planteó en octubre de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Susana Higuchi cuando recomendó al estado peruano que modifique sus normas internas para que exista un “recurso efectivo” contra las decisiones del JNE que violen derechos humanos, y así lo hizo el Tribunal Constitucional en el caso Genaro Espino, publicado en abril del año pasado. El CPC recoge estos planteamientos. Recientemente, en junio del 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yatama condenó al estado nicaragüense por establecer que el amparo no procedía contra las resoluciones del Consejo Supremo Electoral. Según la Corte “independientemente de la regulación que cada Estado haga respecto del órgano supremo electoral, éste debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana” (párrafo 175). El debido proceso es un derecho reconocido por la Convención.

En conclusión, a la luz de la Constitución, de la Convención Americana y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no es posible impedir el empleo del amparo contra las resoluciones del JNE que violen en forma manifiesta el debido proceso. Precisamente, en el presente caso el TC ratifica su posición respecto a la procedencia del amparo contra decisiones del JNE. Ver la sentencia.

Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) –EXP. N.º 0168-2005-P C/TC – Del Santa, caso Maximiliano Villanueva Valverde. 29 de septiembre de 2005.

Presentación, por Samuel Abad:

El Congreso a través de la Ley 28389 que reformó la Constitución vigente, dispuso el cierre del régimen pensionario previsto por el Decreto Ley 20530, el mismo que había sido sumamente cuestionado pues establecía un trato privilegiado para ciertos pensionistas al brindarles pensiones elevadas sin tope alguno que implicaba un enorme gasto al Estado, en desmedro de pensionistas de menores ingresos.

Ante esta situación se presentó una demanda de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional declaró infundada señalando que la ley de reforma constitucional cuestionada respetaba lo dispuesto por la Constitución. Se trata de una extensa sentencia que desarrolla los alcances y limitaciones del régimen pensionario. Ver la sentencia.